

Señores,

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI – SALA LABORAL

sslabcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

E.S.D.

REFERENCIA. Proceso Ordinario Laboral de **JOSÉ MANUEL QUINTERO DÁVILA** contra **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. y OTRO.**

M.P. MARÍA NANCY GARCÍA GARCIA.

RADICACIÓN. 76001310500420190047501.

ASUNTO. Alegatos de conclusión de segunda instancia por **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**

MICHELLE VALERIA MINA MARULANDA, identificada como aparece al pie de mi correspondiente firma, en mi condición de apoderada de la sociedad **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**, demandada dentro del proceso de la referencia, de acuerdo con el poder general que se allega a través de escritura pública No. 1326 del 11 de mayo de 2022 a la firma **GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S.**, firma en la que me encuentro inscrita como abogada, tal y como consta en su Certificado de existencia y representación legal, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 2213 del 13 de junio de 2022 y el Auto N° 246 de fecha 11 de julio de 2022, me permito presentar sustentación de los alegatos de conclusión de segunda instancia, en los siguientes términos:

1. SUSTENTACIÓN ALEGATOS SEGUNDA INSTANCIA:

La sentencia proferida en primera instancia que condenó a mi representada con la declaratoria de ineficacia del traslado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. Se ordenó a mi representada a devolver los valores de la cuenta de ahorro individual durante el tiempo que la parte actora estuvo afiliado a PORVENIR S.A.

Mi representada la AFP Porvenir S.A. considera que no se vulneró ningún derecho en cabeza del demandante por no suministrar información. Lo anterior, teniendo en cuenta que, al momento de la afiliación del demandante, no existía disposición alguna respecto de la información que debían otorgar las AFP a los futuros afiliados.

En ese orden de ideas, mi representada proporcionó al demandante una información clara, veraz y oportuna sobre las características y consecuencias de afiliarse al Régimen de Ahorro Individual, por ello, es que el demandante decidió realizar la suscripción del formulario de

Bogotá D.C., Colombia | Av. Calle 84A # 10-33, Piso 11

PBX: (57-1) 317 4628

Santiago de Cali, Colombia | World Trade Center – Pacific Mall

Calle 36 Norte # 6ª – 65, Oficina 1701

PBX: (57-5) 317 7132

www.godoycordoba.com

afiliación con Porvenir S.A., y lo más importante, sin ningún tipo de error, coacción, fuerza o dolo que lograra invalidar dicho acto.

Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que, durante toda la vinculación del demandante como afiliado de la AFP Porvenir S.A., el afiliado contó con varias oportunidades para revertir su decisión de cambiar de régimen pensional y, pese a ello, no lo hizo, lo que permite argumentar que siempre mantuvo un interés en mantenerse vinculada al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

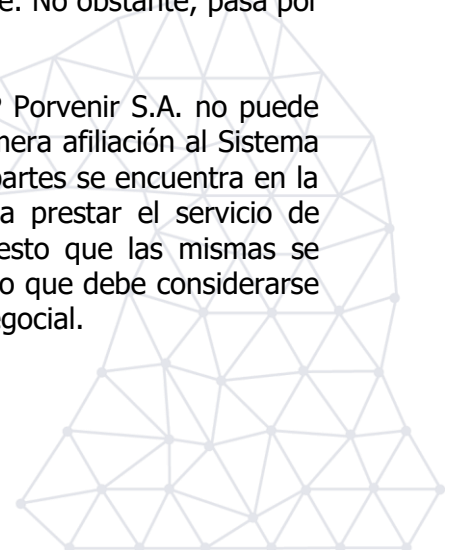
Ahora bien, las consideraciones presentadas por el juez de primera instancia para imponer la condena en contra de mi representada han tenido fundamento en un análisis anacrónico del caso que nos ocupa. Ello es así, porque se pretende que mi representada demuestre el cumplimiento de formalidades que no se encontraban vigentes al momento de la afiliación del demandante y que fueron desarrolladas con posterioridad, inicialmente por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y más adelante, por normas tales como el Decreto 2555 del 2010, el Decreto 2071 del 2015 y la Ley 1748 del 2015. Entonces, si nos remitimos a la normatividad vigente al momento de la afiliación tal como el Decreto 3466 de 1982, el Decreto 663 de 1993, el Decreto 656 de 1994 e incluso la Ley 100 de 1993, es claro que de ellas no se puede extraer que mi representada debía cumplir con un deber de informar tan taxativo como el exigido por la *a quo*.

Mi representada sí proporcionó al demandante información suficiente para que su decisión fuera totalmente informada, no obstante, no existe registro documental de la misma toda vez que para esa época las Administradoras de Fondos de Pensiones no estaban obligadas a llevar tal registro, por lo que la suscripción del formulario de afiliación, que para la época cumplía con los requisitos exigidos, debe valorarse como prueba determinante para el cumplimiento del deber de información en cabeza de la entidad a la que represento.

1. OBLIGACIONES EN CABEZA DE LA DEMANDANTE.

Las consideraciones presentadas por el Juez de primera instancia se encuentran encaminadas a una supuesta falta del deber de información en cabeza de mi representada, y a partir de ese argumento decide en su sentencia imponer a mi representada la declaratoria de ineficacia del traslado efectuado por el demandante. No obstante, pasa por alto el juzgador dos argumentos determinantes.

En primer lugar, el acto de afiliación con mi representada la AFP Porvenir S.A. no puede catalogarse como la suscripción de un contrato, se trata de una mera afiliación al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, en donde ninguna de las dos partes se encuentra en la capacidad de negociar las condiciones sobre las cuales se va a prestar el servicio de aseguramiento de los riesgos de vejez, invalidez o muerte, puesto que las mismas se encuentran taxativamente reguladas en la Ley 100 de 1993. Por lo que debe considerarse que los afiliados y la AFP se encuentran en una misma posición negocial.



En segundo lugar, los afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad son considerados consumidores financieros, lo que les impone un deber y una obligación de informarse de manera diligente y oportuna acerca del Sistema General de Pensiones, especialmente porque es la afiliada quien conoce la situación particular y concreta de sus expectativas laborales, que en últimas son las que le permitirán acceder a un mejor derecho pensional, situación que claramente se escapa del conocimiento de la AFP.

Dicho lo anterior, es claro que la inconformidad que presenta la parte actora ni siquiera está relacionada con el acto de afiliación que realizó, si no con una cuestión meramente aritmética, que escapa de la órbita de la AFP a la que represento, y que no fue tomada en cuenta por el Juez de primera instancia al momento de proferir las condenas en contra de Porvenir S.A, aún más, cuando los afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad obtienen el valor de su mesada pensional a partir de factores determinantes como la capacidad de ahorro que han tenido durante todo el tiempo que han estado afiliados con las AFP.

Finalmente, es menester resaltar si el deber de información es una obligación de medio, no por el contrario, una obligación de resultado.

1. CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LA DECLARATORIA DE INEFICACIA.

Partiendo de la declaratoria impuesta por el Despacho de primera instancia, esto es, la de la ineficacia del traslado realizado por la parte actora al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad administrado por la entidad a la que represento deben tenerse en cuenta los siguientes efectos jurídicos.

La ineficacia implica retrotraer las cosas a un estado inicial, es decir, que mi representada la AFP Porvenir S.A. nunca debió administrar los dineros de la cuenta de ahorro individual del demandante y por ello nunca debieron generarse los respectivos rendimientos financieros.

En ese orden de ideas, y sin que signifique una manifestación contraria a los intereses de mi representada, no es consecuentemente lógico entonces que, a partir de la declaratoria de ineficacia de la afiliación de la parte actora, se ordene a mi representada la AFP Porvenir S.A la devolución de unos rendimientos financieros que en principio deben entenderse como inexistentes.

Por otra parte, es evidente de conformidad con el escrito de demanda, que lo que motivó a la demandante a solicitar la ineficacia del traslado al Régimen de ahorro individual, no reposa en la forma en cómo se produjo el traslado, sino en el supuesto de hecho de no cumplir con las expectativas frente al monto de su pensión. Siendo así, pongo de presente que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en reiterada jurisprudencia, ha esgrimido que no puede entenderse como un engaño a los afiliados, la circunstancia de no cumplir con la

expectativa personal de pensión, por cuanto el monto de la pensión finalmente depende de diferentes factores, como lo son el ingreso de la persona, aportes voluntarios y circunstancias familiares, etc.

En relación con el punto anterior, se tiene que, la inconformidad de la accionante es con el monto de su mesada, por lo que es menester poner de presente que, no se puede hablar de un perjuicio por pertenecer a uno u otro régimen, en la medida que, el sistema general de seguridad social en pensiones se encuentra conformado por dos régimen diferentes y excluyentes entre sí, cuyos beneficios, estructuras, reconocimientos y derechos son discordantes entre ellos. Así las cosas, mientras la mesada pensional de RPM se calcula con base en el monto de los aportes durante los últimos diez años de cotización o, el monto de los aportes durante la totalidad de la historia laboral aunado a la densidad de cotización exigida por la ley; de otro lado, en el RAIS la mesada pensional obedece a cuál fue el monto acumulado por el afiliado en la cuenta de ahorro individual al igual que sus rendimientos, sumados a la previsión de la expectativa de vida y la conformación familiar del afiliado. De lo anterior, se concluye que la forma de calcular la pensión en el RAIS es diferente al RPM, condiciones que la accionante aceptó con las afiliaciones realizadas a la administradora del régimen privado.

Asimismo, es importante resaltar que el deber de información no solo recae en cabeza de mi representada, sino también en cabeza de la demandante como consumidora financiera, al ser una relación de carácter administrativo y no contractual, por lo tanto, no se puede premiar la desinformación de la afiliada, admitiendo la ignorancia de la ley como excusa, contrario a lo expuesto en el artículo 9 del Código Civil colombiano.

Porvenir S.A. no incurrió en ningún tipo de falta de derecho, por tanto, ninguna condena en su contra está llamada a prosperar. Mi representada en ningún momento obró de mala fe o en desconocimiento de la normatividad vigente, cumplió con todas las obligaciones que estaban en su esfera de control al brindar la debida asesoría y manejar adecuadamente los recursos del demandante, quien contaba con plena capacidad legal para obligarse y tomar decisiones relacionadas con su futuro pensional, aunado a la obligación que como consumidor financiero tenía. Por otra parte, la demanda exigía frente a mi representada, obligaciones que no estaban vigentes cuando se realizó el traslado, por lo que deben tenerse en cuenta los efectos de la ley en el tiempo y no imponerse de manera retroactiva obligaciones imposibles de cumplir cuando los hechos ya han acaecido.

No se puede condenar a las AFP a la devolución de los dineros correspondientes a los gastos de administración y las comisiones, incluido el valor desembolsado para cubrir la prima de seguro provisional, dado que existe un desconocimiento de las reglas existentes en materia

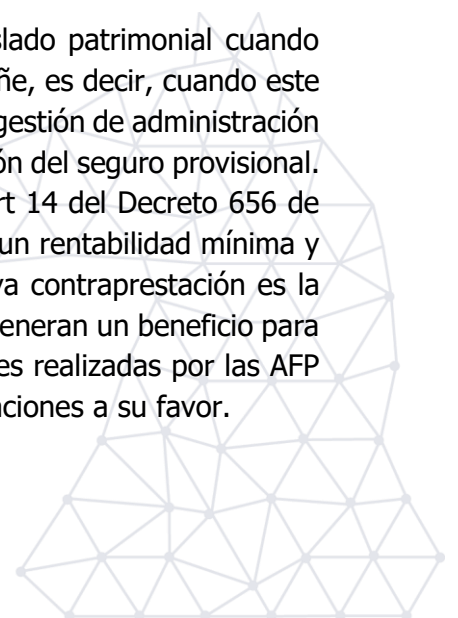
de restituciones mutuas, además del principio que proscribe el enriquecimiento sin causa. Para demostrar lo anterior, es indispensable mencionar que el régimen de las restituciones mutuas tiene como objetivo fundamental que los traslados patrimoniales que quedan sin sustento por la declaratoria de ineficacia del acto jurídico sean devueltos a las partes que lo originaron, es decir, devolver las cosas al estado en que se encontrarían si aquel no hubiera tenido lugar.

Teniendo en cuenta el efecto jurídico anterior, es menester traer a colación el fundamento normativo de las restituciones mutuas, es decir, el art 1746 del Código Civil, que es aplicable al caso de la ineficacia por remisión del art 822 del Código de Comercio en ausencia de una norma especial que regule sus efectos. Si bien el art 1746 hace referencia a la nulidad, en el presente caso se analiza la ineficacia, y este da derecho a las partes a ser restituidas al mismo estado en el que se hallarían si el negocio jurídico que las vincula nunca se hubiera celebrado.

Ahora bien, sobre el alcance de las restituciones mutuas referente al art 1746 del Código Civil, como consecuencia de la ineficacia del negocio jurídico, la Jurisprudencia manifiesta que sin importar la forma en que se haya declarado la ineficacia jurídica, bien sea por falta de algún requisito estructural, o porque adolezca de vicios que invaliden, el efecto jurídico siempre es el mismo, y es la declaratoria de que el negocio jurídico no se celebró jamás.

Es menester aclarar que en el escenario cuyo negocio ha sido cumplido, total o parcialmente como es el caso de la administración de los fondos de pensión, la situación se retrotrae al estado en que las partes estarían de no haber celebrado el negocio. Es en este momento, en donde tiene cabida las restituciones de que trata el artículo 1746, pues la regla general consagra que la nulidad judicialmente pronunciada da a las partes el derecho a ser restituidas al mismo estado en que se hallarían al no existir el negocio nulo.

Esta regla general no supone mayor complejidad de cara al traslado patrimonial cuando versa sobre bienes transmisibles. Sin embargo, en el caso que atañe, es decir, cuando este se refiere a prestaciones que son inviables retrotraer como lo es la gestión de administración de los recursos del afiliado y los valores pagados para la contratación del seguro provisional. Si bien se encuentra a cargo de las AFP de conformidad con el art 14 del Decreto 656 de 1994, la obligación de invertir en recursos del sistema, garantizar un rentabilidad mínima y prestar asesoría. Estas corresponden a obligaciones de hacer cuya contraprestación es la comisión de administración sobre los aportes obligatorios y estos generan un beneficio para el capital del afiliado, dado que, los rendimientos de las inversiones realizadas por las AFP entran a formar parte del capital con el que se financian las prestaciones a su favor.





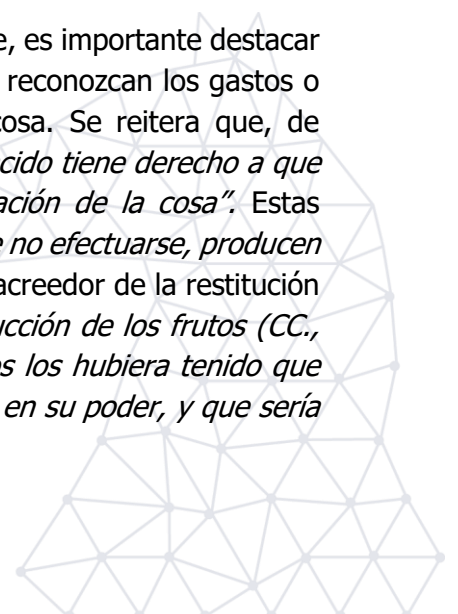
Existe un doble fundamento que subyace a la regla de las restituciones mutuas, por un lado, la equidad, y, por el otro, la prevención del enriquecimiento sin causa. Estos postulados orientan la aplicación de las restituciones mutuas en cada caso, de la siguiente manera: *(i) en primer lugar, como su nombre lo indica, deben ser "mutuas" o "recíprocas", lo que supone que ambas partes están obligadas a devolverse entre sí aquello que hayan recibido de la otra parte en ejecución del negocio ineficaz; (ii) razón por cual debe haber una correspondencia entre lo que se recibió y lo que debe restituirse, siempre que aquello sea susceptible de retrotraerse; y (iii) todo lo anterior, evitando que una de las partes se vea injustificadamente favorecida con las restituciones, ya sea porque recibe más de lo que le corresponde o porque restituye menos de lo que debería.*

La jurisprudencia se ha remitido a las normas sobre prestaciones mutuas en la reivindicación art 961 y sgtes Código Civil: El efecto retroactivo de la declaración de nulidad de un acto o contrato en el cual las cosas deben regresar al estado anterior, este objetivo se cumple a través de las restituciones recíprocas, aquellas que sean inherentes a la decisión han de considerarse siempre por el fallador, ya sea oficio o a petición de parte.

"Y conforme a lo imperado por el artículo 1746 del C. C., la determinación de estas recíprocas prestaciones que surgen para las partes litigantes de la declaración de nulidad, debe regirse por las mismas disposiciones legales que gobiernan las prestaciones mutuas en la reivindicación"

Las normas sobre prestaciones mutuas en la reivindicación establecen que el poseedor vencido debe restituir el bien en el plazo fijado por la ley o por el juez (art 961 del Código Civil), junto con los frutos naturales y civiles, percibido o que el dueño hubiera podido percibir. En todo caso el poseedor tendrá derecho a que le abonen las expensas necesarias invertidas en la conservación de la cosa (art 965 del Código Civil).

Para los efectos de los casos que son objeto de estudio por la Corte, es importante destacar el derecho que tiene la parte obligada a la restitución a que se le reconozcan los gastos o expensas en los que ha incurrido para la conservación de la cosa. Se reitera que, de conformidad con el artículo 965 del Código Civil, *"el poseedor vencido tiene derecho a que se le abonen las expensas necesarias invertidas en la conservación de la cosa"*. Estas expensas son *"las orientadas a la conservación de la cosa y que, de no efectuarse, producen su menoscabo, deterioro o pérdida"*, y deben ser asumidas por el acreedor de la restitución en la medida en que *"es un gasto ordinario invertido en la producción de los frutos (CC., art. 964). Este criterio del legislador se funda en que tales gastos los hubiera tenido que hacer el reivindicante de todas maneras si la cosa hubiere estado en su poder, y que sería*





un enriquecimiento injusto en el propietario que tuviera la facultad legal de no reintegrar estas mejoras (...)". Así las cosas, la parte obligada a la restitución tiene derecho al reconocimiento de los gastos en los que haya incurrido para evitar que el bien se deteriorara o se perdiera, puesto que se trata de erogaciones que el propietario del bien también habría tenido que realizar.

La jurisprudencia ha señalado que su razón de ser se encuentra en los postulados de la equidad y de la prevención del enriquecimiento sin causa, de manera que ninguna de las partes involucradas puede verse beneficiada sin justificación alguna. Sobre el particular, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha explicado que *"en el punto de las prestaciones recíprocas, ha dicho la Corte que las disposiciones legales que gobiernan las prestaciones mutuas a que puede haber lugar, por ejemplo, en las acciones reivindicatorias y de nulidad, tienen su fundamento en evidentes y claras razones de equidad, que procuran conjurar un enriquecimiento indebido. Por tal razón, ha repetido esta Corporación, tales restituciones mutuas quedan incluidas en la demanda, de tal manera que el juzgador debe siempre considerarlas en el fallo, bien a petición de parte, ora de oficio. (...) Por tal virtud, la sentencia de nulidad ciertamente produce efectos retroactivos y, por consiguiente, cada parte tiene que devolver a la otra lo que ha recibido como prestación del negocio jurídico anulado, o sea, las partes quedan obligadas a devolverse lo que recíprocamente se hubieren entregado en desarrollo de la relación jurídica declarada nula (...)*.

Lo relacionado con las prestaciones mutuas a que puede haber lugar en las acciones reivindicatorias, tiene su fundamento en evidentes razones de equidad, porque siendo posible que el demandado mientras conserva la cosa en su poder se haya aprovechado de sus frutos, o la haya mejorado o deteriorado; en el caso de que fuera condenado a restituirla debe, naturalmente, proveerse lo conveniente sobre esos puntos, porque de otro modo, se consagraría bien un enriquecimiento indebido de parte del reo, cuando se aprovecha de los frutos de una cosa que no es suya, o del actor, al recibir mejorado a costa ajena un bien que le pertenece cuando el reivindicador toma para sí las mejoras puestas por el poseedor. Por tanto, debe brillar el sinalagma, la justa medida, la reciprocidad y el equilibrio. Una parte no puede aprovecharse de la otra, ni mucho menos obtener utilidad o enriquecimiento desmedido sobre la otra, por cuanto el derecho no es el normativismo puro, sino el imperio de la justicia.

Así las cosas, al ordenar, como consecuencia de la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional, que se restituyan *"los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones"*, se desconocen las reglas sobre restituciones mutuas (artículo 1746 del Código Civil), pues, a pesar de que la Sociedad Administradora

de Fondos de Pensiones y Cesantías ejecutó cabalmente sus obligaciones y, en tal virtud, generó una rentabilidad a favor del afiliado, aquellas gestiones se dejan sin la correlativa compensación a la que tiene derecho la entidad demandada. Así pues, al resultar imposible retrotraer los efectos de las labores de administración desarrollados por las Administradoras, que ya se encuentran consolidados, no es procedente ordenar la restitución de las sumas percibidas por ese concepto, pues con ello se estaría quebrando el equilibrio por el que se debe propender con las restituciones mutuas.

Desde esa perspectiva, una adecuada aplicación de las reglas sobre restituciones mutuas supondría respetar los efectos consolidados y que no se pueden retrotraer por su propia naturaleza, como ocurre con la ejecución de las obligaciones de hacer y que implica que la prestación correlativa a aquella tampoco pueda restituirse, pues de lo contrario se estaría generando un enriquecimiento injustificado en cabeza de una de las partes.

Como ya se ha señalado, debe tenerse en cuenta también que los valores recibidos por las Administradoras por gastos de administración y comisiones pueden ser considerados como "expensas necesarias" en el lenguaje utilizado en las reglas sobre restituciones recíprocas, que tendría derecho a conservar la entidad demandada de conformidad con el artículo 965 del Código Civil. Su condición de expensas necesarias se sustenta en que los gastos de administración y las comisiones están dirigidos a cubrir los costos y remunerar las actividades adelantadas por las Administradoras, en cumplimiento de un mandato legal, para la conservación del capital administrado, así como para el desarrollo de las demás labores encomendadas por el legislador a estas sociedades con el objetivo de garantizar la pensión de vejez al afiliado y prestarle los servicios a que tiene derecho en esa condición.

El afiliado también hubiera tenido que incurrir en gastos de administración de haber permanecido afiliado al RPM, pues el legislador estableció para ambos regímenes que el 3% de los dineros cotizados se destinan a cubrir los gastos de administración y la prima del seguro previsional de invalidez y sobrevivientes. Esto impide considerar que los cobros por administración y comisiones a la luz de las reglas del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones puedan considerarse un deterioro al patrimonio del afiliado, pues lo cierto es que esos dineros tampoco hubieran ingresado como parte de sus aportes para la financiación de la pensión de vejez en el RPM.

Desde esa perspectiva, resulta cuestionable el razonamiento de la doctrina sentada por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pues el análisis para establecer si una erogación constituye un detrimento al patrimonio del afiliado no se puede hacer al margen de la normativa que rige el régimen pensional correspondiente. Por esta razón, el ejercicio

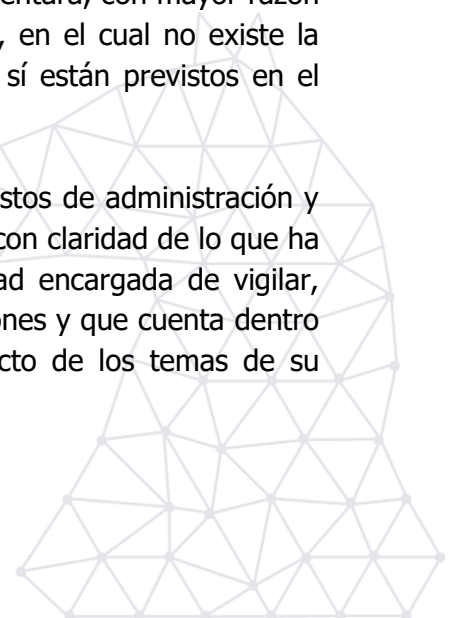
no puede ser simplemente determinar si los dineros dejan de hacer parte del capital destinado a financiar la pensión, pues lo cierto es que, si se trata de una erogación prevista por el legislador para conservar e incrementar los recursos del afiliado y financiar la pensión de vejez, mal se le puede tildar de deterioro. Un razonamiento semejante puede realizarse respecto de las primas de seguros.

De igual forma, tampoco es procedente devolver suma por concepto de rendimientos, suma de la aseguradora con todos sus frutos e intereses debido a que aquellos rendimientos únicamente se generan gracias a la debida gestión de los dineros a cargo de mi representada, y de no haber estado en el régimen de ahorro individual, dicho valor no se hubiera generado. Siendo así, no habría lugar conforme a la declaratorio de ineficacia a devolver tal valor.

Resulta igualmente cuestionable la orden de restitución de los valores correspondientes a las primas de seguros previsionales. Comoquiera que el contrato de seguro es un contrato de tracto sucesivo, es claro que una vez agotado el término por el que se adquirió la cobertura, el asegurador devengó de manera definitiva la totalidad de la prima acordada, como se colige del artículo 1070 del Código de Comercio.

En el mismo orden de ideas, tampoco es procedente que la administradora deba restituir las sumas que pagó por concepto de primas de los seguros previsionales, por cuanto ya no están en su poder, sino en el de la compañía aseguradora que contrató para la cobertura del pago de las sumas adicionales necesarias para financiar las prestaciones que, por mandato legal, así lo requieran. La destinación de estas sumas también cumplió su objetivo y, en consecuencia, aquellas se agotaron y extinguieron. La cobertura que brindó la respectiva compañía de seguros ya se hizo efectiva y no puede retrotraerse en el tiempo, por ser material y jurídicamente imposible. Por esa misma razón, no es viable que se restituyan las sumas que sirvieron para que esa cobertura se presentara, con mayor razón si no cumplirían ningún objetivo en el Régimen de Prima Media, en el cual no existe la necesidad de contratar seguros previsionales para los fines que sí están previstos en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

Que no es jurídicamente procedente ordenar la devolución de gastos de administración y de lo pagado por concepto de prima del seguro previsional surge con claridad de lo que ha conceptuado la Superintendencia Financiera de Colombia, entidad encargada de vigilar, entre otras, a las sociedades administradoras de fondos de pensiones y que cuenta dentro de sus facultades con la de emitir conceptos doctrinales respecto de los temas de su competencia.



Tampoco es procedente que se ordene la devolución del porcentaje destinado al *Fondo De Garantía De Pensión Mínima* en la medida que esas sumas ya se encuentran extintas y que no hacen parte de los dineros que administra mi representada.

De igual forma, tampoco es procedente devolver suma por concepto de rendimientos, suma de la aseguradora con todos sus frutos e intereses debido a que aquellos rendimientos únicamente se generan gracias a la debida gestión de los dineros a cargo de mi representada, y de no haber estado en el régimen de ahorro individual, dicho valor no se hubiera generado. Siendo así, no habría lugar conforme a la declaratorio de ineficacia a devolver tal valor.

Por demás está decir, dada la naturaleza del régimen y la permanente inversión en bolsa, el capital depositado en la cuenta de ahorro individual genera una rentabilidad periódica y en consecuencia no pierde el valor adquisitivo de la moneda. Razón por la cual, es improcedente realizar la indexación incoada por la parte actora.

En los anteriores términos presento mis alegatos de conclusión y solicito a los Honorables Magistrados del Tribunal Superior de Cali revocar la decisión y, en consecuencia, absolver a mi representada de todas y cada una de las condenas impuestas en su contra.

2. PETICIÓN.

En consecuencia, de lo anterior, respetuosamente solicito:

1. **REVOCAR** en su integridad el fallo proferido por el Juzgado Cuarto (04) Laboral del Circuito de Cali, el día 08 de marzo de 2022, para en su lugar **ABSOLVER** a mi representada de todas pretensiones incoadas.
2. **CONDENAR EN COSTAS** a la parte demandante.

I. ANEXOS

Anexo a la presente contestación de demanda los siguientes documentos:

1. Los documentos relacionados en el respectivo acápite.





2. Poder otorgado a través de Escritura Pública a la firma Godoy Córdoba Abogados S.A.S. por parte de Porvenir S.A.
3. Certificado de Existencia y Representación Legal de Godoy Córdoba Abogados S.A.S en donde me encuentro inscrita.
4. Tarjeta Profesional y Cédula de Ciudadanía de la suscrita.

II. NOTIFICACIONES.

Las recibiré en la Secretaría del Juzgado, en mi oficina ubicada en la Calle 36 Norte #6ª – 65, Oficina 1701 de la ciudad de Santiago de Cali o en los correos electrónicos notificaciones@godoycordoba.com y vmi@godoycordoba.com, este último debidamente inscrito en el Registro Nacional de Abogados.

III. TRASLADO A LAS DEMÁS PARTES

En atención a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley 2213 del 13 de junio de 2022 y el numeral 14 del artículo 78 del Código General del Proceso, se remite el presente memorial en copia a los demás sujetos procesales:

- 1 La apoderada judicial de la parte demandante, señora Annie Julieth Bobadilla, a los correos electrónicos: annyjulieth81@hotmail.com
- 2 La Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES al correo electrónico: notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co
- 3 La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado al correo electrónico: procesosnacionales@defensajuridica.gov.co

Señor Magistrado,

MICHELLE VALERIA MINA MARULANDA

C.C. 1.234.195.459 de Cali

T.P. 359.423 del C.S. de la J.

